



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

EXPTE: 56100/2022

“PETROARSA SA c/ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Sentencia Definitiva

En la Ciudad de Buenos Aires, reunidos los Señores Magistrados integrantes de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar pronunciamiento en la presente causa, se procede a emitir el voto en el siguiente orden:

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

PETROARSA SA impugna la Resolución 07/2022 en cuanto determina la existencia de deuda por diferencia en las contribuciones ingresadas por los periodos 07/2010 a 11/2016 por un total de \$ 8.073.628,14 en concepto de capital e intereses y una multa de \$1.595.944,36 por lo que el organismo fiscal consideró un incorrecto encuadre de la rubrada en el Decreto N° 814/2001, durante los periodos señalados.

La apelante rechaza la deuda determinada por entender que no se tuvieron en cuenta los planteos por ella efectuados en su defensa. Esgrime imposibilidad de dar cumplimiento a la exigencia prevista en el artículo 15 de la ley 18.820 dado que su situación financiera al 31/07/22 no permite detraer suma alguna sin comprometer la cancelación de pasivos asumidos y el desenvolvimiento de sus actividades comerciales lo que implicaría poner en riesgo la continuidad de las fuentes de trabajo. Subsidiariamente acompaña un seguro de caución expedido por Alba Compañía Argentina de Seguros SA, Póliza N° 960.539 por un importe de \$ 9.715.677,12.

En cuanto al fondo de la pretensión fiscal afirma no adeudar nada pues, según expresa, en todo momento actuó conforme normativa vigente que entiende aplicable. Solicita se deje sin efecto la deuda reclamada pues la pretensión de AFIP se fundamenta en una interpretación errática al excluirla de la aplicación del inciso b. del artículo 2do del Decreto 814/01, y consecuentemente negarle su condición de pequeña y mediana empresa del sector comercio, que en la práctica se traduce en la aplicación del tope histórico de \$48.000.000, que no solo resulta desactualizado sino además es violatorio de ulteriores resoluciones de la Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. En opinión de la impugnante, el organismo debió dejar de lado el tope de \$48.000.000 fijado por la Resolución 24/01, y sustituirlo por imperio de nuevas resoluciones tales como la 675/02, disposición 147/06, y las Resoluciones 21/10, 50/13, 357/15 y 11/2016 entre otras.

Fecha de firma: 03/05/2023

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#37282829#363062917#20230427092610132



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

La demandada rechaza la apelación presentada argumentando que los agravios vertidos no son más que una disconformidad con lo decidido en el ámbito administrativo pero que en realidad no hay agravios concretos pues en ningún momento demostró su contraria que la aplicación efectuada de la norma fuera incorrecta toda vez que el concepto de PyME, a los efectos de la alícuota de contribuciones patronales, es la que surge del decreto 1009/01 y la remisión efectuada por dicho decreto a la Resolución SEPyME N°24, tuvo como único objetivo la de definir la actividad principal del empleador y la forma de cálculo de sus ventas, pero el concepto PyME a los efectos de la determinación de la alícuota es la que surge únicamente de dicho decreto, ya que el mismo no ha sido modificado.

Entiendo conveniente proceder a la apertura de la presente instancia ante la eventualidad que su pago llegue a comprometer los recursos financieros de la apelante. La solución contraria podría importar una lesión a la garantía constitucional de la defensa en juicio (art. 18 CN).

Lo anterior responde al criterio amplio propiciado en la materia por el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación a fin de evitar que el pago impuesto por el legislador importe un real menoscabo a garantías constitucionales (ver CSJN sent. del 14/05/95 “Sanatorio Otamendi y Miroli” DT 1996-A-319; ídem. sent. del 11/06/98 “Cadesu c/DGI” y “Pandolfi c/DGI” pub. LL 25/02/2010 N° 1143636 entre otros). Por otra parte, el Tribunal Cimero consideró que el seguro de caución garantiza suficientemente el interés fiscal por lo que debe tenerse por satisfecho la exigencia prevista en el artículo 15 de la ley 18.820 (conf. CSJN “Orígenes AFJP SA c/AFIP s/Impugnación de deuda” sent. del 04/11/2008).

En cuanto al fondo del tema sometido a juzgamiento habré de propiciar la confirmación de la resolución recurrida.

Sobre el tema en disputa ya he fijado mi posición como vocal preopinante en la sentencia definitiva 150.132 del 19 de febrero de 2013 recaída en los autos “Granja Dos Cuñados SA c/AFIP” que he reiterado al votar la causa “Arpenta Cambios SA c/AFIP” sent. del 17/03/17.

En efecto, la ley 24.476 creó un régimen jurídico especial tendiente a promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, considerando como tales a aquellas cuyo plantel no supere los cuarenta trabajadores y tengan una facturación anual inferior a la cantidad que para cada actividad fije un organismo administrativo -Comisión Especial de Seguimiento- que sería el encargado de evaluar el impacto que, sobre las relaciones de trabajo, tuviera la creación de un régimen laboral especial en la materia (arts.83 y 105, ley citada).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

De lo expuesto surge que la noción de pequeña y mediana empresa es fluctuante al menos en materia económica pues, aunque la empresa no llegue a superar los cuarenta trabajadores bien podría ser considerada una gran empresa cuando su facturación anual supere cierto monto, lo que revelaría su potencialidad económica.

Con posterioridad se sancionó la ley 25.300 –ley de fomento para la micro, pequeña y mediana empresa- cuyo objetivo sería el fortalecimiento competitivo de dichas entidades aclarándose que la autoridad de aplicación será la que definirá las características de las empresas para ser tipificadas como: micro, pequeña o mediana aclarando que, entre sus tareas está la de revisar anualmente la definición de micro pequeña y mediana empresa a fin de actualizar los parámetros y especificidades contempladas en la definición adoptada (ver art. 1º, ley citada) que no sería otra que la establecida por el art. 83 de la ley 24.467.

En cumplimiento de los fines establecidos por la ley 24.467 se dictó el decreto 943/97 que creó la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa como autoridad de aplicación de la ley 24.467 y es, dicha autoridad, la que determinó que empresas serían consideradas micro, pequeñas o medianas tomando como referencia que las ventas totales anuales no superaran ciertos valores que eran diferenciados según se trate de empresas de construcción, servicios, comercio, industria y minería y agropecuario.

El art. 2º del Decreto 814/2001 establece una alícuota del 21% para los empleadores cuya actividad principal sea la locación y prestación de servicios con excepción de los comprendidos en las leyes 23.551, 23.660, 23.661 y 24.467 y uno sustancialmente menor para los restantes empleadores no comprendidos en el inciso anterior, esto es los empleadores considerados titulares de una pequeña o mediana empresa, siendo dicha resolución afectada por la sanción de la ley 25.453 que redujo la alícuota al 20%.

Cabe destacar que las anteriores directivas no tienen un carácter absoluto pues por la propia ley 25.414 que declaró la emergencia pública se facultó al Poder Ejecutivo a eliminar exenciones en materia fiscal y/o contributiva y por ello se dictó el decreto 1.009/2001 estableciendo que las pequeñas y medianas empresas estarían comprendidas en los términos del art. 2º inciso a) del decreto 814/2001 en la medida que sus ventas totales anuales superen los 48.000.000 millones de pesos que es, precisamente, lo que sucede con el apelante.

Como ya expresara la definición de pequeña y mediana empresa es mutable en nuestro ordenamiento jurídico y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa tiene facultades para tipificar que entidades productivas entran en dicha tipología o no, exclusivamente a los fines laborales (art. 83 ley 24.467)





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

pero no fiscales y/o contributivos, debiendo prevalecer directivas como las derivadas de la ley 25414 que es un cuerpo normativo de emergencia pública.

La parte actora en su escrito de impugnación insiste en que existen sobradas razones para interpretar la legislación de la manera en que lo hizo, pues afirma que el decreto 814/01 es una norma modificada o complementada por otras normas y que su parte liquidó las contribuciones patronales según pautas cuantitativas de facturación anual establecidas por diversas resoluciones que sucedieron a la original Resolución N° 24/01 (SEPyME) actualizándola, así: Res. 675/2002 SEPYME \$ 86.400.000, Disposición 147/2006 SEPYME \$ 88.800.000, Res. 21/2010 SEPYME \$ 111.900.000, llegando a través de la Res. 50/2013 SEPYME a \$ 250.000.000. Monto este último que sucesivamente recibió la actualización impuesta por la Resolución 357/2015 a \$ 343.000.000 y la Resolución 11/2016 a \$ 650.000.000 (ver escrito de impugnación) razón por la cual solicita se deje sin efecto la determinación de deuda aplicada.

Refiere, a mayor abundamiento, que los montos surgidos de los ejercicios contables quedarían comprendidos dentro de las cifras contenidas en las distintas resoluciones que actualizan la original Resolución 24/01 SEPyME.

También solicita se la exima del pago de la multa pretendida pues según entiende para la aplicación de una multa es necesario que se acredite el acontecimiento de un hecho típico antijurídico situación no atribuible a la impugnante pues nunca existió falsificación de declaraciones juradas ni otra situación que justifique la imposición de sanción alguna. ya que el empleador efectuó el cálculo de las contribuciones patronales conforme lo indica la normativa que entiende aplicable, ingresándolas en su totalidad en tiempo y forma.

No puedo compartir tal aseveración dado que en lo atinente al cumplimiento de las exigencias de seguridad social el mero incumplimiento genera la consiguiente responsabilidad y sanción sin que tenga cabida el elemento subjetivo (ver esta Sala sent. del 19/10/98 “Pilot Pen SA”), y no encuentro en la causa elementos suficientes que justifiquen apartarme de la decisión administrativa que se recurre.

Sin perjuicio de lo anterior, los decretos 814/01 y 1009/01 así como el artículo 173 de la ley 27430 fueron derogados por la ley 27.541, la cual en su capítulo tercero bajo el título “Seguridad Social. Contribuciones Patronales” estableció un nuevo régimen de alícuotas. Esta modificación si bien no alcanza al periodo reclamado (julio de 2010 a noviembre de 2016) deberá tenerse en cuenta para periodos posteriores.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

En virtud de todo lo expresado, teniendo en cuenta la labor profesional desarrollada en autos, su complejidad y la facultad que otorga al magistrado el artículo 1255 del C.C. y Ccial de la Nación, se establecen los honorarios de representación letrada de la parte demandada y de la parte actora en 15 UMA (\$223.995) y 10 UMA (\$149.330) respectivamente, CSJN. Ac. 09/2023.

Por lo expuesto propongo declarar habilitada la presente instancia judicial, confirmar la resolución recurrida, imponer las costas a la vencida (art. 68 CPCCN), regular los honorarios de representación letrada de la parte demandada en 15 UMA (\$ 223.995) y 10 UMA (\$ 149.330) en favor de la representación letrada de la parte actora (CSJN. Ac.09/2023).

EL DOCTOR JUAN FANTINI ALBARENQUE DIJO:

Adhiero al voto de la Dra. Dorado en cuanto a la apertura de la presente instancia en atención a que la recurrente acompaña un seguro de caución expedido por Alba Compañía Argentina de Seguros SA, Póliza N° 960.539 por un importe de \$ 9.715.677,12. Monto que si bien no alcanzaría a cubrir el total por el capital reclamado, intereses y multa (\$ 10.936.903,72), entiendo que la diferencia existente esto no puede ser óbice para habilitar la presente instancia, ello por aplicación del principio "in dubio pro administrado".

Ahora bien, disiento en cuanto al fondo de la cuestión. Entiendo que asiste razón a la impugnante por las siguientes consideraciones.

Del juego armónico de las resoluciones y decretos aplicables surge que el decreto 1009/2001 ha variado sustancialmente el contenido de la Resolución 24/01 de la SEPyME y también los montos a partir de los cuales corresponde aplicar la alícuota numérica aplicable en concepto de contribuciones patronales. Ello como consecuencia del proceso inflacionario que desde hace mucho tiempo azota nuestro país.

Si bien el beneficio de reducción de porcentaje de contribuciones patronales derivados del Decreto 814/01 se complementa con el Decreto 1009/01, que estableció la definición de PYME por remisión a la Resolución N° 24/2001. Esta última, a través de su artículo 1°, dispuso que serían consideradas micro, pequeñas y medianas empresas aquellas cuyas ventas totales expresadas en pesos no superen los valores por ella establecidos. A posteriori dichos montos fueron actualizados en virtud de distintas resoluciones dictadas por de la Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (así: 147/2006, 21/2010, 50/2013, 357/2015,11/2016,103-E/2017) para evitar la desnaturalización del espíritu de la ley cuyo objetivo era promover el desarrollo de las PYMES.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

En virtud de lo anterior entiendo que el encuadramiento de PYME quedará esclarecido si la facturación de la infraccionada arroja un monto inferior al límite establecido por las resoluciones antes citadas que correspondan al periodo por el cual se efectuaron los cargos.

Lo antes expresado viene a coincidir con el criterio adoptado por mayoritaria jurisprudencia de esta Cámara (ver Sala III del 11/05/2009 “Codimat SA c/AFIP -DGI s/Impugnación de deuda”, Sala I sent. del 23/02/2015 “Salud y Belleza SA c/AFIP s/Impugnación de deuda”).

Cabe señalar que el Decreto 814/2001 fue reformado por la ley 27.430. También la ley 27541, vigente desde el 23 de diciembre de 2019, introdujo una serie de modificaciones con respecto al cálculo y liquidación de las contribuciones patronales mediante la derogación de los decretos 814/2001, 1.009/2001 y artículo 173 de la ley 27.430.

Ello así el análisis efectuado se acota al periodo del cargo, revocándose la resolución recurrida en los términos indicados.

El sentido de mi voto me exime del tratamiento de los demás agravios vertidos.

En cuanto a los honorarios, teniendo presente que la ley 27.423 no puede ser aplicada en autos en forma mecánica dado que dicho cuerpo legal no contempla expresamente el proceso de impugnación de deuda. Ello así y teniendo presente lo expresado por el Superior Tribunal de la Nación en cuanto a que la regulación de honorarios no debe depender exclusivamente del monto del reclamo sino que deberá ser ponderada por los jueces bajo pautas de razonabilidad, atendiendo a la naturaleza, complejidad del asunto, mérito de la causa, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado (CSJN Fallos 257:142; 296:126; 302:534 y sus citas; 320:495; 339:216 entre otros) y lo dispuesto por el artículo 1.255 del Código Civil y Comercial de la Nación se regulan los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora en 115 UMA (\$ 1.717.295) conf. CSJN Acordada 09/2023, importe al que se adicionará IVA en caso de corresponder (conf. CSJN “Compañía General de Combustibles SA s/recurso de apelación” Fallos 316:1523). Con respecto a los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte demandada, deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 2° de la ley 27.423.

Por lo expuesto propongo se declare habilitada la presente instancia judicial, se haga lugar al recurso de apelación presentado, revocando la resolución recurrida. Las costas sean impuestas a la vencida (art. 68 CPCCN). Regular los honorarios de representación letrada de la parte actora en 115 UMA (\$ 1.717.295) conf. CSJN Acordada 09/2023, importe al que se adicionará IVA en caso de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

corresponder. Con respecto a los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte demandada, deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 2° de la ley 27.423.

EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:

Adhiero al voto del Dr. Fantini Albarenque.

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal, por mayoría, **RESUELVE:** 1°) Declarar habilitada la presente instancia judicial, 2°) Hacer lugar al recurso de apelación presentado, 3°) Revocar la resolución recurrida, 4°) Imponer las costas a la vencida (art. 68 CPCCN), 5°) Regular los honorarios de representación letrada de la parte actora en 115 UMA (\$ 1.717.295) conf. CSJN Acordada 09/2023, importe al que se adicionará IVA en caso de corresponder. Con respecto a los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte demandada, deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 2° de la ley 27.423. Regístrese, notifíquese, publíquese y, oportunamente, remítase.

JUAN FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

WALTER F. CARNOTA
Juez de Cámara Subrogante

Ante mí: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI
Secretaria de Cámara

ALP.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

